

DECLARACION

La Alianza Democrática cree su deber expresar su pensamiento sobre la situación en que se encuentra el país.

Al cabo de diez años de régimen autoritario nuestra patria vive la peor crisis económica, política y social de su historia, de cuyos efectos negativos no se ha librado ningún sector del país.

Las restricciones a la libertad, la falta de participación y la prolongada interdicción política de los chilenos no puede prolongarse. El desempleo masivo y la paralización productiva están afectando gravemente la vida de toda la población, generando angustia, hambre y desesperanza.

Ante este cuadro tan dramático, la Alianza Democrática tiene la más profunda convicción de que el país requiere para una efectiva pacificación de los espíritus, un cambio político y económico profundo, mediante la implantación de una transición rápida a la democracia. El cambio económico y político que reclamamos es condición ineludible para la pacificación de los espíritus.

1.- La necesidad de "otra" política económica.

La crisis profunda de la economía chilena ha golpeado duramente a la mayoría de los trabajadores y empresarios. La responsabilidad política y técnica del desastre recae, fundamentalmente, en los gobernantes y en las autoridades económicas que con el respaldo absoluto del Jefe del Estado dispusieron de un poder que les permitió imponer sin contrapeso sus equivocadas concepciones ideológicas.

Hace tiempo que los hechos restaron toda credibilidad al intento de culpar de nuestros males a la recesión internacional, sin duda real, pero a la que no es posible cargarle la magnitud de la crisis. Ningún país del mundo ha tenido una caída del Producto Geográfico Bruto cercana al 15%, como la que experimentó Chile en 1982, ni presenta grados tan extremos de endeudamiento interno y externo. Pocos regímenes han llegado a un balance tan desalentador que se resume en una disminución tan sustancial del ingreso per cápita, que éste es hoy considerablemente inferior al que tenían los chilenos al comienzo de la década del 70.

El nivel de desempleo, incluidos PEM y POJH, asciende a alrededor de 30%, el endeudamiento externo alcanza a 20 mil millones de dólares, el nivel de ahorro interno es bajísimo (no más de 3% del PGB en 1982) y el endeudamiento de las empresas productivas con el sistema financiero y de éste con el Banco Central ha dejado al conjunto de la economía en una situación de extrema inestabilidad y dependencia. Como consecuencia de esto, ha crecido el déficit habitacional y se ha hecho difícil y, a menudo, inalcanzable, el acceso a la salud y la educación.

Una crisis de tal magnitud no se resuelve con medidas marginales de tipo reactivo, ni puede confiarse la recuperación a quienes son responsables principales del fracaso. Por ello la Alianza Democrática se suma a las voces angustiadas y airadas de trabajadores, empresarios y gremios que reclaman un cambio en la actual dirección de la economía.

No corresponde a la Alianza Democrática formular un plan económico concreto, que es responsabilidad directa del Gobierno, pero el país necesita confianza en la capacidad de los chilenos de movilizar los cuantiosos recursos actualmente ociosos y una política de reactivación efectiva y rápida que genere las indispensables fuentes de trabajo, que permitan dar nuevos cauces a la iniciativa empresarial y que restituya a los chilenos su posibilidad de vivir con dignidad.

2.- La urgencia de un cambio político.

Al cabo de diez años de graves y persistentes restricciones a la libertad y vigencia permanente de estados de excepción, la designación de un nuevo Ministro del Interior pareció responder a las exigencias de cambio, al requerimiento de apertura política y transición efectiva a la democracia que con creciente fuerza se estaba planteando en el país, y también una reacción a la protesta social cada vez más intensa y generalizada que expresa el descontento popular. Por ello, se generó un clima de esperanza en diversos sectores de la población, particularmente la clase media y el empresariado.

En el mes y medio ya transcurrido se realizaron dos reuniones de diálogo con representantes de la Alianza Democrática, en las que el Ministro formuló declaraciones de voluntad democrática, de su intención de acelerar el proceso de transición, incluyendo modificaciones constitucionales si fuere necesario, y de restituir las libertades públicas, cuestión esta última, planteada por la Alianza, como requisito previo de un cambio político de fondo.

La opinión pública ha cifrado grandes expectativas en el diálogo así iniciado y aparece desconcertada ante su posterior interrupción y aparente estancamiento. La Alianza Democrática está consciente de la trascendencia que se ha atribuido a estos hechos y por ello considera indispensable dejar en claro su posición.

Es indiscutible que en las últimas semanas se han producido medidas de liberalización traducidas en la restitución parcial de algunas libertades públicas, en el retorno de un mayor número de exiliados y en el término de uno de los Estados de Emergencia. Sin embargo, los avances producidos están lejos de ser suficientes para satisfacer la necesidad imperiosa de un cambio político de fondo.

El art. 24 transitorio sigue vigente y amenaza a todo aquel que de una u otra forma disienta del régimen. La política sigue legalmente proscrita de modo que estamos en presencia de una situación de tolerancia o benevolencia de la autoridad que puede ser revertida en cualquier instante, como se ha encargado en reiterar lo en frecuentes intervenciones el Jefe del Estado. Por último, quienes no adhieren al gobierno no tienen acceso real al medio de comunicación de masas mas importante como es la televisión.

3.- Condiciones para el diálogo.

La Alianza Democrática ha estado siempre dispuesta al diálogo. Tal es así que su propuesta política se denomina "Bases de Diálogo para un gran Acuerdo Nacional". En ella se formulan propuestas concretas y precisas, en relación con la necesidad de un gobierno que no deje duda alguna de su decisión de ir a la Democracia, a través de una reducción sustancial de los plazos y la de una Asamblea Constituyente y Legislativa que introduzca las modificaciones necesarias para tal objeto.

Hasta ahora, ellas han sido respondidas por el gobierno solo con una manifestación muy general de voluntad de marchar a la democracia plena, pero bajo las condiciones impuestas por la Constitución en actual aplicación, lo que implica desconocer las urgencias de cambio profundo que reclama la gravísima crisis que sufre el país.

La esencia del diálogo radica en las materias que se incorporen a la agenda de discusión, así como en la claridad y precisión de los juicios y propuestas que respecto de ellas se formulen, lo que condiciona, a su vez, la posibilidad de resultados fructíferos.

Queremos, por ello, ser francos y directos. Nos asiste la mas profunda convicción de que para que el Diálogo pueda fructificar se requiere un programa político concreto de retorno rápido a la democracia, cuyos plazos y modalidades de puesta en práctica implican un cambio constitucional. No puede ser de otra manera porque es un hecho objetivo que la Constitución en aplicación no es un factor de unidad nacional. Por el contrario, divide y polariza a los chilenos.

La Alianza Democrática tiene el deber de señalar que no tendrá destino un diálogo que pretenda desarrollarse en un marco de ambigüedad o de inmovilismo respecto del proceso de retorno a la democracia. El país está, pues, a la espera de una decisión gubernativa y de iniciativas concretas que configuren una agenda susceptible de ser objeto de un diálogo constructivo.

Creemos, por último, que el programa político de transición rápida a la democracia que esperamos es condición necesaria para la eficacia de la nueva conducción política y económica que se reclama. Sacar al país de la crisis requiere un esfuerzo conjunto de participación amplia y responsable compartida por todos los sectores, en un clima político de paz que requiere un retorno a la democracia plena aceptado por toda la comunidad.

4.- La pacificación de los espíritus.

El país ha sido dolorosamente impactado por recientes hechos de violencia producidos en las poblaciones de Santiago, Valparaíso y otros lugares del territorio nacional. La Alianza Democrática comparte la angustia colectiva y suma su voz al clamor general que reclama el fin de toda violencia. Creemos que para que tal cosa ocurra es indispensable, en primer término, hacer un esfuerzo serio y objetivo para comprender las causas que generan esta realidad. Nos asiste la mas profunda convicción que en su esencia se trata de una expresión social causada por el hambre, la miseria y la desesperanza a que ha conducido la gravísima y persistente situación de desempleo, sumado a la falta de participación y a la represión dura y a menudo brutal, que ha caracterizado al comportamiento de la autoridad ante las protestas de los sectores más modestos de la población, lo que es aprovechado por

minorías extremistas para causar un clima mayor de agitación.

Son múltiples los testimonios de pobladores, sacerdotes y periodistas que ratifican esta visión acerca de la naturaleza y causas de la violencia. Rechazamos por ello de manera categórica la acusación gratuita de que al llamar la Alianza Democrática a protestas pacíficas, haya incentivado de hecho la violencia. Creemos, por el contrario, haber realizado un esfuerzo responsable por evitarla, encauzando la protesta social hacia formas pacíficas de expresión.

El país tiene derecho y necesita que se aclare la verdad de lo ocurrido y se estudien a fondo sus causas. Reiteramos por ello al gobierno la necesidad de constituir una comisión independiente del más alto nivel en que participen personeros de la Iglesia, Colegios Profesionales, Comisión de Derechos Humanos y otras entidades, para que proceda a una investigación objetiva de los hechos, dé luego a conocer al país por los medios de comunicación, incluida la Televisión Nacional, las conclusiones de su trabajo. Todo esto sin perjuicio de poner los antecedentes a disposición de la justicia para que se juzgue a quién corresponda.

La única forma de evitar nuevos y quizás peores brotes de violencia es una urgente y decidida acción del gobierno encaminada a producir un cambio político y económico profundo, mediante un programa concreto de retorno rápido a la democracia.

LA ALIANZA DEMOCRATICA

Santiago, 23 de septiembre de 1983